

El fuego que también enciende la rabia...

Marco Coscione

Hoy, viernes 19 de junio, un incendio consumió buena parte del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, en Bayahíbe. Las llamas se propagaron fácilmente con la ayuda del viento hacia varios lugares del complejo turístico. Hubo evacuaciones masivas, al menos diez personas atendidas por los servicios de emergencia, varias trasladadas a centros de salud y una turista italiana de 46 años fallecida. Pero lo que quedó grabado en las redes sociales, además que el fuego mismo, fue la espera de un solo camión de bomberos y la necesidad de intervención de la Fuerza Aérea con helicópteros para suplir lo que debería ser una respuesta terrestre, rápida y casi rutinaria para estructuras como éstas.

Esa imagen —un país que ofrece sol y playa al mundo pero no logra mover más de un camión de bomberos a una emergencia mayor— no es nueva ni accidental. El Cuerpo de Bomberos dominicano es, desde su origen, una institución que no tiene presupuesto para sostenerse: buena parte de la renovación de su flota ha dependido históricamente de las donaciones de países extranjeros y no de una política de Estado financiada con recursos propios. Las mejoras salariales y de equipo registradas en los últimos años parten de un piso tan bajo que no alcanzan a resolver el problema estructural: un sistema de emergencias fragmentado, subfinanciado y dependiente de la voluntad política del momento, no de un flujo fiscal estable.

Y aquí aparece la contradicción de fondo. Un sistema de emergencias de calidad —camiones suficientes, personal de carrera, equipos especializados para incendios estructurales en zonas turísticas— se financia con impuestos. Pero el sector que más debería sostenerlo, porque es el que concentra el riesgo —grandes complejos hoteleros, alta densidad de huéspedes, estructuras inflamables como los techos de cana—, es también el que menos contribuye. Desde el año 2001, con la Ley 158-01, el régimen de incentivos otorgado a los proyectos hoteleros aprobados ha prácticamente blindado el sector contra el fisco... por diseño legal, no por accidente.

Ese diseño tuvo, en su momento, una justificación: atraer capital a un país que quería construir su industria turística desde cero. Pero el turismo dominicano dejó hace tiempo de ser una apuesta incierta; es hoy el principal motor de divisas del país, con cadenas hoteleras internacionales sólidamente establecidas. Mantener exenciones diseñadas para una industria naciente sobre una industria madura ya no es fomento al desarrollo: es una transferencia permanente de riesgo del sector privado hacia el Estado y, en última instancia, hacia el contribuyente dominicano de a pie, que sí paga ITBIS cada vez que consume. El resultado es una arquitectura perversa: la zona que genera la mayor concentración de riesgo de incendios —miles de huéspedes, estructuras altamente inflamables, alta ocupación, entre otros aspectos— es también la que menos aporta, proporcionalmente, al sistema que tendría que apagarlo.

No se trata de plantear que el turismo deba pagar todo el impuesto posible sin matices, ni de ignorar que algunas exenciones tienen plazos y condiciones. Se trata de nombrar la contradicción con precisión: un Estado no puede sostener un discurso de país-marca turístico de clase mundial mientras renuncia a la base fiscal que financiaría la infraestructura básica —bomberos, ambulancias, protección civil— que ese mismo modelo turístico necesita para ser creíble y seguro. A esto podemos sumar la corrupción y la debilidad institucional que erosionan aún más lo poco que sí se recauda.

Bayahíbe no se incendió por mala suerte ni por el viento. Se incendió con un solo camión de bomberos disponible porque, durante más de dos décadas, el país decidió —vía exenciones renovadas administración tras administración— que el sector con mayor capacidad de pago fuera, precisamente, el que menos pagara. Mientras esa ecuación no se revise, cada incendio futuro en una zona turística dominicana se podría convertir en una tragedia impredecible, pero seguirá siendo la consecuencia previsible de una política fiscal que el país sigue sin querer modificar.